

RELACIONES ENTRE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y EL REINO DE GALICIA: EL PAPEL DE LOS DIPUTADOS GENERALES DEL REINO¹

Eduardo Cebreiros Álvarez

Universidade da Coruña

Resumen: El trabajo estudia el papel del Diputado General del Reino de Galicia en la corte, en su función de gestión de los asuntos de este territorio ante la monarquía hispánica. La hipótesis de partida es que su tarea de ejercer como la voz del reino, instando en Madrid la ejecución de los acuerdos tomados en las Juntas del Reino, no se llevará a cabo por atender este oficio a intereses localistas o personales. El sistema de nombramiento se encontrará detrás de toda esta problemática, puesto que la designación por turnos entre las siete ciudades que integran las Juntas del Reino traerá un sinfín de problemas.

Palabras clave: Juntas del Reino, Diputado General, Galicia, Edad Moderna, corte.

Abstract: This work analyzes the role of the “Diputado General” of the Kingdom of Galicia in the court, in its function of managing the affairs of this territory in the Hispanic monarchy. The starting hypothesis is that its task of acting as the voice of the kingdom, urging in Madrid the execution of the agreements taken in the “Juntas del Reino”, will not be carried out by responding to local or personal interests. The election system will find itself behind all this problematic. The appointment by turns of the seven cities that integrate the “Juntas del Reino” will bring an endless number of problems.

Key words: Juntas del Reino, Diputado General, Galicia, Modern Age, court.

1. INTRODUCCIÓN

EL punto de partida de este trabajo es el de examinar un aspecto de las relaciones entre el Reino de Galicia y la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. Particularmente, se trata de acudir a las personas, a los agentes encargados de trasladar las órdenes, acuerdos o pareceres, para, analizando su actuación, valorar si cumplieron debidamente su función y las peticiones que llegaron a la corte, efectivamente, coincidían con la voluntad que expresaba el territorio gallego a través de sus instituciones representativas.

¹ Trabajo elaborado dentro del marco del proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, referencia HAR2017-83605-P.

Existen estudios institucionales sobre oficiales unipersonales y órganos colegiados, pero sobre la figura de estos agentes son pocos los trabajos que han visto la luz, especialmente por la dificultad de seguir la pista a unos delegados que no contaban con un registro o archivo propio de sus actuaciones, por lo que su actuación se conoce, fundamentalmente, por la correspondencia que dirigían a las diferentes instituciones político-administrativas gallegas. Sin embargo, su relevancia es patente, pues aparecen mencionados con mucha frecuencia en documentación administrativa de muy diversa procedencia, tanto municipal, como territorial o de la corte y sus instituciones de gobierno.

Como sabemos, Galicia luchó arduamente por lograr el voto en Cortes, lo que conseguiría en 1623, entrando así a formar parte de la institución política por excelencia de la monarquía, aunque en este periodo se hallaba en franca decadencia. Será, sin embargo, en las Juntas del Reino, donde se canalizará el sentir de Galicia. Por ello, hacia ahí deberemos dirigir nuestras miradas si queremos encontrar el posicionamiento político de una zona periférica como la gallega en la que el señorío, tanto laico como eclesiástico, era muy significativo. Esta lejanía de las instituciones que manejaban el poder de la monarquía hacía aún más relevante la actividad de aquellos oficiales que, representando a Galicia, se encontraban próximos a ellas.

Muy probablemente, la cuestión que habría que intentar responder sobre este tema que planteo es si existía una postura uniforme y clara de Galicia sobre los diferentes temas que se abordaban en ese territorio y que luego se trasladaban a la corte. Sobre ello se pueden plantear serias dudas por las individualidades y particularismos de ciudades, nobles y eclesiásticos que la documentación archivística pone de manifiesto, lo que a los ojos de la monarquía podía conllevar una visión de opiniones dispares sobre el mismo tema. Por este motivo, resulta fundamental estudiar el papel que juegan los diferentes representantes que actuaron en la corte, bien en nombre de toda Galicia, bien en el de algunas ciudades o villas. Más difícil resultará averiguar el sentido de todas aquellas gestiones que la pléyade de delegados y representantes haya hecho de viva voz en reuniones o encuentros de los que no nos ha quedado constancia documental.

2. LA VOZ DEL REINO

Las Juntas del Reino de Galicia,² como es sabido, conformaban una institución político-administrativa que actuaba, principalmente, sobre la base de

² Sobre las mismas véase Enrique Fernández-Villamil Alegre: *Juntas del Reino de Galicia: historia de su nacimiento, actuaciones y extinción*, 3 vols., Madrid, 1962; Antonio Eiras Roel: "Las Juntas del Reino de Galicia: Orígenes y proceso de institucionalización", *Obras de historia moderna*, 4 (1995), pp. 115-182; Manuel María de Artaza: *Rey, Reino y representación: La Junta General del Reino de Galicia (1599-1834)*, Madrid, 1998.

los acuerdos adoptados en las reuniones de los representantes de las siete ciudades-provincias que integran este territorio.³ Ellas eran las encargadas de plasmar esa “voz del reino”. Sin embargo, la hipótesis de trabajo de estas páginas es cuestionar esa actuación, partiendo de la dificultad, no tanto de trasladar esos acuerdos recogidos por escrito, como de gestionar en la corte la voluntad del reino a través de diferentes tipos de agentes: diputados generales del reino, agentes en Madrid, diputados para asuntos concretos o particulares...

El discurso oficial de las Juntas era claro en el sentido de que todos los acuerdos adoptados lo eran por el conjunto del reino. Formal y jurídicamente, eso era así, pues las decisiones se tomaban por mayoría de votos, de forma colegiada, y las ciudades disconformes con alguna de las proposiciones aprobadas podían realizar las observaciones que considerasen oportunas, a modo de “voto particular” de hoy en día, solicitando justificante de tal actuación. Ello le permitiría emprender otro tipo de acciones o “salvar” su posición en el caso de que la medida aprobada fuese declarada nula de pleno derecho, por ejemplo.

Señalaba Fernández-Villamil,⁴ en su ya clásico estudio sobre las Juntas, que: “*Necesitábase que Galicia estuviera de alguna suerte representada ante la Corte, y que en el piélagos de sus Consejos diversos, de los altos Tribunales, de los Presidentes, los cortesanos, la Real Cámara y las covachuelas, alguien asistiera continuadamente y elevara la voz de la lejana Galicia*”.

El carácter periférico de nuestro territorio, unido a la complejidad de una administración en la que, con el paso de los siglos, el régimen polisinodial evolucionaría hacia una mayor dependencia de los validos, primero, y de los secretarios de estado y del despacho, ya en la etapa borbónica, aumentarían los problemas a la hora de conseguir la resolución de asuntos o, tan solo, conocer el estado de los mismos.

3. LOS OFICIALES QUE REPRESENTAN

De este modo, se designaron ya desde épocas tempranas, diferentes comisionados o diputados que con carácter puntual y, para atender asuntos concretos, acudían a la corte a interesarse por los mismos. Será solo a finales del siglo XVII cuando se logre institucionalizar una figura con carácter permanente, el Diputado General del Reino.

Estos conformarán los denominados “embajadores de una nación”, como señalaba, ya en el siglo XVIII, Francisco Somoza⁵ o “la diplomacia interior” de la que habla Angulo,⁶ ya en nuestros tiempos.

³ A Coruña, Santiago de Compostela, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Ourense y Tuy.

⁴ Enrique Fernández-Villamil Alegre, *Juntas del Reino de Galicia*..., p. 297.

⁵ Francisco Somoza de Monsoriu: *Estorvos i remedios de la riqueza de Galicia. Discurso político-legal*, vol. II, Santiago de Compostela, 1775, p. 42.

Aparte de los comisionados y diputados temporales, el reino contó con agentes. Los agentes del reino en la Corte eran verdaderos profesionales de la gestión, que tenían como modo de vida el seguimiento administrativo de papeles.

Se hace preciso aclarar que estos agentes del reino ejercían en Madrid múltiples funciones, defendiendo intereses de otras instituciones o personalidades, por lo que, su falta de exclusividad, provocaba conflictos cuando el oficial no actuaba con la diligencia necesaria, demorando sus gestiones más allá de lo deseable.

Debemos tener en cuenta, además, que algunas ciudades gallegas tenían su propio representante en la corte,⁷ lo que patentiza la desorganización y falta de unidad en este tema, además de la desconfianza hacia el defensor general de los intereses comunes.

3.1. *Los Diputados Generales del Reino*

En la Junta celebrada en 1689 se analizó el escrito del ayuntamiento de A Coruña en el que planteaba al reino el envío de un regidor de las siete provincias a Madrid para seguir los asuntos generales, y también, los de las ciudades y provincias.⁸ Ya en la propuesta, se insistía en la necesidad de que quedase constancia de su actuar, para lo que se planteaba la creación de un libro registro en el que se fuesen consignando todas las gestiones del diputado relacionadas con el reino y otro individualizado para las llevadas a cabo a favor de cada una de las ciudades.⁹ Si loable era la idea, no consta que se llevase a cabo, pese a que en iguales términos se obligaba a su formación en la Junta de 1697, que procedería al primer nombramiento de diputado, como veremos.¹⁰

No será hasta 1692 cuando el Consejo de Castilla apruebe este oficial. La Real Provisión que daba carta de naturaleza a esta institución del Diputado

⁶ Alberto Angulo Morales: “Ciudades, villas y territorios. La representación de las tres provincias vascas en la corte en tiempos de los Austrias”, en D. Carvajal e I. Vítóres (eds.), *Poder, fisco y mercado en las ciudades de la Península Ibérica (siglos XV-XVI)*, Valladolid, 2015, pp. 241-257.

⁷ La propia Real Provisión de creación del oficial mencionaba que solían encontrarse en Madrid hasta cuatro o cinco representantes de ciudades gallegas, estando, en aquel momento, los delegados de Mondoñedo, Santiago y Orense, véase Antonio Eiras Roel (coord.): *Actas de las Juntas del Reino de Galicia (1690-1697)*, vol. XI, Santiago de Compostela, 2002, p. 320.

⁸ Dice, literalmente, el escrito del concejo coruñés, que su creación sería “*para que asista y solicite las dependencias y pleitos de dicho Reyno y al tanto de cada ciudad y provincia en particular...*”, véase Antonio Eiras Roel (coord.): *Actas de las Juntas del Reino de Galicia (1681-1689)*, vol. X, Santiago de Compostela, 2002, p. 769.

⁹ *Ibidem*, pp. 770-771.

¹⁰ Antonio Eiras Roel (coord.): *Actas de las Juntas...*, vol. XI, pp. 286-287.

General establecía que la Junta del Reino podría designar a quien deseara de entre los capitulares de alguna de las ciudades. Una vez llegado a la corte, se retirarían todos los particulares que tenían las mismas.¹¹ De hecho, esta disposición justificaba la creación del oficio en el ahorro que supondría para las ciudades gallegas no tener que pagar su propio comisionado.

El primer Diputado General será el Marqués de Mos, pero no será nombrado hasta la Junta celebrada en 1697, de capital importancia, pues en ella se tomarán las decisiones más relevantes para organizar la institución. Será aquí donde se acuerde el sistema de nombramiento, por turnos entre las siete ciudades, cambiando cada tres años siguiendo el orden de antigüedad de las mismas, si bien se aprobará la excepción de que comience Tuy en atención a las cualidades del elegido. También será en esta reunión en la que se fijen determinadas condiciones o exigencias:

–La ciudad turnante deberá comunicar a las otras el nombre del elegido.

–El delegado deberá residir en la corte “*sin estrabiar a otra parte*”.

–Los gastos de las gestiones que se realicen para el Reino serán pagadas por todas las ciudades, pero los que se refieran solo a una de ellas correrán a cargo de la beneficiaria de tales actuaciones.

–Se formarán varios libros-registro con toda la actividad que lleve a cabo el diputado. Uno con lo referente a los asuntos del Reino y otros con los pertenecientes a cada una de las siete ciudades. Además, estos libros se irán pasando de diputado a diputado para que el entrante pueda estar al tanto del estado de las diferentes gestiones.

–Ningún diputado podrá apoyar la pretensión de su ciudad contra otras del Reino.

–No podrá realizar transacción o acuerdo sin el permiso o autorización de todas las ciudades representadas en la Junta o de la afectada por el tema.¹²

La idea de partida era muy buena: Que el Reino tuviese una única persona que centralizase todas las actuaciones de interés para el territorio, lo que, además, supondría un ahorro a las ciudades, que no tendrían que enviar a su representante.

Como salario se estipuló que, inicialmente, recibiese 3.000 ducados, pagados por todas las ciudades a prorrata.

3.1.1. *El Diputado General y su labor de representación*

El gran tema que debemos abordar sobre esta figura es el de su representatividad. Parece claro que, desde un punto de vista formal, cuenta con un nombramiento legal para ser la “voz” del Reino, dejando ahora al margen la

¹¹ *Ibidem*, p. 321.

¹² *Ibidem*, pp. 286-287.

problemática por la falta de consenso de las ciudades al respecto, que se dio en algunos momentos. Sin embargo, desde una perspectiva práctica o, más bien, fáctica, surge la duda de si estas personas cumplen con los encargos recibidos y actúan en pro de los intereses generales, o se manifiestan más partidarios de intervenir en defensa de criterios más partidistas, quizás podríamos hablar de localistas, o, incluso, personales.

Para defender esta última idea, parto de una visión de las cosas plasmada en algunas actuaciones llevadas a cabo por las Juntas del Reino. En particular, me ha llamado la atención las quejas que algunos procuradores de ciudades elevaban en las Juntas sobre las gestiones de los diputados generales (en tema de foros, por ejemplo) y cómo una de las estrategias a seguir será la de esperar la finalización del turno del diputado cuestionado para, con el nuevo representante, actuar en un sentido distinto. ¿No es esto un claro ejemplo de una falta de voz común del Reino, pese a los acuerdos existentes al respecto?

3.1.2. *Los conflictos en el cargo*

Los problemas en la institución comienzan ya muy temprano, en 1701, con la designación del Marqués de Santa Cruz por parte de la ciudad de Santiago. El interés del Marqués de Mos por continuar en su puesto no haría más que agravar la situación. La excusa formal para mantenerse sería la falta de comunicación del nuevo designado al resto de capitales por parte de la ciudad del Apóstol. En la práctica, lo que sucedía es que se dudaba del apoyo del Marqués de Santa Cruz a los intereses del reino, pues tenía parentesco con el Almirante de Castilla, parte opositora en uno de los pleitos que mantenía Galicia en la corte.

Probablemente, el gran problema al que se tuvo que enfrentar la institución fue al de la negativa a su propia existencia. La ciudad de Orense se oponía al mantenimiento en la corte del Diputado General por su coste e inutilidad¹³ y del mismo parecer era el regidor tudense Alonso Correa quien, en 1702, revocó el acuerdo de aceptar el diputado general.¹⁴ Un año antes, sin embargo, no ponía obstáculos a que continuase su suegro el Marqués de Mos.

¹³ “Y el señor don Juan de Losada, regidor de la ciudad de Orense, dize que por haverse conferido entre los señores cavalleros diputados que componen esta Junta no ser de ninguna utilidad y provecho el tener este Reino diputado general en la corte, antes sí muy gravoso a los naturales dél por los crecidos salarios para su asistencia, que le sirve de mucha carga y de ningún alivio, desde luego el que vota, en nombre de su ciudad y provincia, reboca el poder dado al señor Marqués de Santa Cruz y el que dio dicha ciudad de Orense en la Junta que se estableció dicho diputadado general, y que en brebe se le aga a saver dicha rebo-cación”, véase Antonio Eiras Roel (coord.): *Actas de las Juntas del Reino de Galicia (1701-1704)*, vol. XII, Santiago de Compostela, 2003, p. 114.

¹⁴ *Ibidem*, p. 639.

En 1746, la ciudad de Santiago contestaba en sentido totalmente negativo al escrito recibido desde A Coruña pidiéndole apoyo para que se restableciese el oficio de Diputado General, sin cubrir tras la muerte de Gregorio Luaces el año anterior. El concejo compostelano era claro, afirmando que la institución era muy beneficiosa, pero que las ciudades habían pretendido sacar provecho únicamente para sí, alargando sus turnos, lo que había provocado su inutilidad, siendo tan solo una fuente de grandes gastos.¹⁵

El interés por “reflotar” esta institución puede deberse a la intención de la corona de establecer una Diputación permanente del Reino,¹⁶ con sede en A Coruña, integrada por dos regidores de las siete ciudades, idea que no era del agrado de la mayoría de las ciudades, aunque llegó a aprobarse en Junta.¹⁷ Ese impulso de la Diputación permanente ponía de manifiesto, con claridad, la ineficacia del diputado general que actuaba en la corte, quien desaparecería de modo fijo, acudiendo solo a Madrid cuando un asunto grave lo requiriese.¹⁸

¹⁵ “...siendo el medio de la concordia y de la paz la ygualdad y la alternación, destruhido por el camino de abrogarse una sola la facultad que devía circular por todas, no avía que esperar sino el desorden que siempre resulta de arruinarse la ley de cuius observancia pende la unión. Y así salieron yneficazes quantos ofizios ha pasado esta ciudad porque no se biolase el establezimiento de la diputación general según la avía acordado el Reino. Y viendo que en la última Junta que éste ha celebrado se propuso su extinción, ha combenido en ella por obiar questiones y otros ynconvenientes que se siguieron de su distinta forma, con ymponderables gastos a esta provinzia que no le produjeron el menor venefizio en el transcurso de tantos años”, véase Miguel Romaní Martínez (coord.): *Actas das Xuntas do Reino de Galicia (1745-1746)*, Vol. XIX, Santiago de Compostela, 2008, p. 507.

¹⁶ Sobre la misma y sus antecedentes en el siglo XVII, véase Manuel María de Artaza: *Rey, reino y representación...*, pp. 188-197. Me permito reenviar, también, a Eduardo Cebreiros Álvarez: “Sobre la representación de Galicia en el siglo XVIII: La Diputación Permanente del Reino” en J. Baró Pazos (ed.): *Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en las Cortes del Antiguo Régimen en la Monarquía Hispánica*, Madrid, 2017, pp. 171-193.

¹⁷ Así mostraba su preocupación la ciudad de Betanzos en escrito dirigido a la de Tuy: “...que no se admita ni subsista la Diputación de dos capitulares, que ha significado a V^{ra}. Sr^a, el Exm^o. señor Governador y Capitán General en este Reyno, para solución de las ynstancias yntroduzidas de la última Junta. Sobre que hará efectiva representación a la real comprensión de su Magestad y señores Ministros a quien toca, manifestando que lo que conviene es ynsiga la observanza de la usanza del Reyno y de la precisa yndispensable asistencia del cavallero diputado general en la corte, en conformidad de las actas acordadas, estatuidas y aprovadas por la real soberana authority y del Supremo Consejo, que no cabe se alteren en manera alguna como beneficiosas y útiles al real servicio y causa pública. Lo que no contempla la zitud redunde o fluya de la enunciada particular Diputación de dos en la Coruña, ynfructuosa y causatiba de dispendios escusados”, Véase, Miguel Romaní Martínez (coord.): *Actas das Xuntas do Reino...*, vol. XIX, p. 484. La Junta del Reino lo pedía el 16 de enero de 1746, *ibidem*, pp. 424-425.

¹⁸ En este sentido, resultan muy claras las palabras que, a fines de 1745, el Reino dirigía a la corte exponiendo las razones por las que se debería aprobar la mencionada Diputación: “Que respecto la experienzia thiene acreditado en quantas Juntas de Reino se an echo que de todo lo que se a representado nunca se a logrado el menor alivio, y menos después de disuelta,

Otro obstáculo al normal desarrollo del oficio fue su discontinuidad. En esta primera etapa de los inicios del siglo XVIII, hubo periodos sin Diputado o en los que este fue cuestionado. Ello, al menos, hasta 1728, en que el puesto recayó en el regidor por Coruña Gregorio Luaces, quien permanecería hasta su muerte en 1745, saltándose todos los turnos establecidos. Esta circunstancia provocó que no fuese reconocido por algunas ciudades, como Betanzos o Santiago, que se opusieron a él desde 1734. Tal y como señala el profesor Artaza, no estamos ante un diputado general, sino particular de algunas ciudades.¹⁹

Incluso, hubo nombrados que no se posesionaron a ejercer su trabajo. Fue el caso del designado por Betanzos en 1748, Manuel Muñiz, quien dos años después aún no había acudido a Madrid, por no habersele dado los anticipos que solicitaba.²⁰

En abril de 1764, la Junta criticaba al diputado general José de Zúñiga por su mal hacer, llegando a sustituirle por el agente en la corte Miguel Pérez, que había sido designado por las ciudades. En 1775, este diputado llegará a criticar a su sucesor, el elegido por Lugo, José Simón de Montenegro, a quien veía partidista y sin ánimo de apoyar al reino.²¹

En 1781, una vez más, el Diputado Miguel Obarrio no era aceptado por todas las ciudades. Mondoñedo y Orense habían designado al suyo, Pedro Vivero, con lo que tampoco en este periodo se podrá hablar de un diputado general de todo el reino.²²

La falta de unidad entre ciudades también se manifiesta en la actuación llevada a cabo por algunos de los agentes de negocios que Galicia tenía en la corte, tal y como, con pena y cierto grado de frustración, expresaban algunos de ellos. Es el caso de Pedro de Sequeiros quien, en 1658, al gestio-

*por las distintas y obpuestas pretensiones de las ciudades que miran a sus particulares ynterese y olvidan los xenerales de todo el Reino, parece que el único medio de restablezer y co-hordinar estas boluntades e ynterese a un sólido y respetable fin será mantener siempre formado el Reino en caveza de dos diputados, que por sus turnos deverán nombrar las ciudades, los que an de residir al lado del Capitán Xeneral que es o fuere, el que será presidente de esta proyectada Junta, que entre otras cosas tendrá las utilidades siguientes. Escusarán las ciudades el diputado de la corte a menos que se ofresca al Reino asumpto de grande ymportanzia, que en tal caso deverá salir según el turno establezido, bien entendido que este diputado susistirá sólo en la corte mientras durare el asumpto a que se le despacha, y de fenezido se deverá retirar. Y ocurriendo otro ygual asumpto que motive ynvair asimesmo diputado deverá ser nombrado por la que se sigue y correlativamente las demás. Que dando cada ciudad quenta a esta Diputación de qualquiera asumpto que se le ofresca representar a su Magestad lo ará la Junta, y siendo la representación en voz de Reino y autorizada con la firma del Capitán Xeneral se puede esperar feliz éxito”, véase Miguel Romaní Martínez (coord.): *Actas das Xuntas do Reino...*, vol. XIX, pp. 345-346.*

¹⁹ Manuel María de Artaza: *Rey, reino y representación...*, pp. 210-211.

²⁰ *Ibidem*, p. 213.

²¹ Enrique Fernández-Villamil Alegre: *Juntas del Reino de Galicia...*, pp. 426-427.

²² Manuel María de Artaza: *Rey, reino y representación...*, pp. 221-222.

nar el encabezado de sisas del reino, se quejaba amargamente de la posición que Lugo, Orense y Santiago habían mantenido al respecto.²³

Un buen ejemplo de cómo se había procedido a la hora de organizar y regular el oficio de diputado general podemos verlo a comienzos del siglo XIX. En 1800, el Diputado Vázquez Viso señalaba que en el archivo de la institución no constaba ni una instrucción para los diputados, ni el privilegio para la creación del cargo, afirmando que los oficiales se moverían en muchas ocasiones por intereses particulares.²⁴ Con esta confesión, el oficial corrobora buena parte de las tesis que venimos defendiendo en cuanto a la parcialidad de la institución.

3.1.3. *Los poderes del Diputado General*

Uno de los elementos más relevantes para analizar la actuación del Diputado General es el de los poderes que recibe. Debemos tener en cuenta que jurídicamente era un mandatario, por lo que debería actuar siguiendo solo las instrucciones que recibiera, aunque estas podrían ser muy amplias si se concedía un poder general. El conflicto se suscita, no tanto por esta circunstancia de recibir unas consignas tan poco concretas que le permitan una actuación muy libre, sino por el hecho de ser una ciudad la que lo designa y contar con unos poderes generales de ella que son asumidos por el resto. Así se explicaba con claridad su funcionamiento en el acuerdo de la Junta celebrada en mayo de 1697 que nombró al primer Diputado General, el Marqués de Mos: “*a de poder cada una de dichas ciudades por sí sola otorgar poder a su capitular, que tenga la misma fuerza y valor que si le fuere otorgado por el Reyno en Junta formal, sin que para su validación sea necesario juntarse el Reino*”.²⁵ La única condición que se ponía para considerar que el poder lo otorgaba todo el Reino era que la ciudad turnante lo comunicase a las otras para que estas supiesen a quien debían dirigirse, como ya mencioné con anterioridad.

En definitiva, el diputado recibía un poder general para que pudiese actuar con eficacia, confiando el Reino en que siempre se emplearía con la diligencia adecuada, si bien serían por su cuenta y riesgo todas las actuaciones que se apartasen de las instrucciones que recibiese, de ser el caso.²⁶

²³ “*Sabe Dios que yo lo habría sacado, [se refiere al encabezado de sisas] pero las tres ciudades de Lugo, Orense y Santiago lo dispusieron de manera que por fines particulares lo echaron a perder, por no hacer la paga de la anticipación, que esto no me tocaba...*”, véase Enrique Fernández-Villamil Alegre: *Juntas del Reino de Galicia...*, pp. 321-322.

²⁴ Enrique Fernández-Villamil Alegre: *Juntas del Reino de Galicia...*, p. 436.

²⁵ Antonio Eiras Roel (Coord.): *Actas de las Juntas...*, vol. XI, pp. 285-286.

²⁶ “*...el poder se le a de otorgar general y sin limitación alguna, en segura confianza de que no faltará al cumplimiento de las dichas condiciones. Y faltando en todo o en parte sea*

Ahora bien, también se explicitaba que el diputado necesitaba consultar con el Reino en el caso de que pretendiese formalizar algún tipo de transacción o concordia, todo ello, al margen del poder general que hubiese recibido.²⁷

Si nos planteamos examinar esos poderes o instrucciones, sí constan, lógicamente, los acuerdos tomados en las Juntas, que serán los que marcarán la actividad de los diputados generales, pero no podemos hablar de una específica concreción de los mismos, directamente, a estos delegados en la corte.²⁸

Por otra parte, tampoco se conoce documentación específica donde los diferentes diputados generales se dirijan a la ciudad que los ha nombrado en busca de instrucciones sobre cómo actuar ante concretas situaciones. Todo parece indicar que se movían con bastante libertad de movimientos.

3.1.4. *Análisis de las posibles causas de la problemática del oficio*

Tras todo lo señalado, se hace imprescindible intentar responder a la gran cuestión de cuál es la causa que genera toda esta problemática en el funcionamiento del oficio, máxime si tenemos en cuenta, como veremos, que no parece que esto suceda en otros territorios que también enviaron su propio diputado a la corte.

Considero que es el sistema de elección de los representantes el que está detrás de toda esta conflictividad. Ese acuerdo de turnos entre ciudades para enviar el diputado a la corte falló en innumerables ocasiones y contribuyó a deslegitimar a quien debiese ser el delegado de todo el reino de Galicia.

De hecho, durante el periodo de estudio, encontraremos numerosas peticiones para cambiar el sistema de designación. Lugo, en 1735, pretendía que todas las ciudades participantes en las Juntas aprobasen al Diputado.²⁹ La misma ciudad, en 1769, seguiría en esta línea al solicitar que fuese la pro-

por su quenta y riesgo y todos los daños que dello se siguieren y causaren, demás de que se le a de poder obligar por todo rigor a que cumpla con todo lo susodicho, y poderse haçer prenda y retención del salario del último año de su asistencia”, ibidem, pp. 287-288.

²⁷ “...Y con condiçión de que dicho señor Marqués, ni otro diputado del Reino, no aya de poder haçer transaçión ni concordia sobre dependencia alguna que toque a Reino ni a sus ciudades en general ni en particular, sin que primero, preçediendo consulta de quien fuere interesado, obtenga permiso con la forma e ynstruçion que se le diere para el otorgamiento de qualquiera transaçión...”, *ibidem*, p. 287.

²⁸ Sí contamos con instrucciones claras en el caso de los mensajeros o agentes navarros, véase Mercedes Galán Lorda: “Navarra en la Monarquía española: los agentes en la Corte en el siglo xvi”, en AA.VV.: *Historia iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González*, vol. I, Oviedo, 2014, p. 696.

²⁹ Miguel Román Martínez (coord.): *Actas das Xuntas do Reino de Galicia (1735-1740)*, vol. XVIII, p. 409.

pia Junta del Reino, y no el turno de ciudades, la que designase a este oficial. En rigor, la Real Provisión de 1692 que aprobaba su designación, estipulaba que sería la Junta la encargada de elegir el diputado. Solo que el acuerdo de la propia Junta, de cinco años después, optaba por un sistema más ágil y rápido que no necesitaba de reunión de todas las ciudades representadas. Sin embargo, cuando aparecieron voces opuestas a aprobar el designado por la ciudad que le tocaba en turno, los argumentos siempre eran los mismos, a saber, el nombramiento debía recaer en quien eligiese la Junta, no resultando aceptable que el diputado que representase a las siete ciudades no fuese del agrado de todas, máxime cuando eran ellas quienes contribuían a pagarle su salario.³⁰ Mantener el turno por encima de los intereses del Reino carecía de sentido.

En la misma línea se encuentran autores como Somoza de Monsoriu,³¹ quien señalaba que uno de los obstáculos para lograr la riqueza de Galicia era la falta de un buen Diputado General, situación que achacaba al método de elección. El remedio, a su juicio, sería que ese representante fuese designado directamente por la Junta del Reino, quien debería nombrar a alguien que conociese muy bien los problemas de Galicia.³²

Esta conflictividad gallega no aparece en otros territorios que enviaron a la corte sus delegados, como, por ejemplo, el reino de Navarra. En este caso, el método de designación fue establecido directamente por la diputación navarra, al igual que las características de su funcionamiento, pues el cargo se ejercía por tiempo ilimitado. Todo ello ayudó, sin duda, a evitar conflictos.³³ Del mismo modo, también contribuyó el hecho de que las Cor-

³⁰ Lugo señalaba que solo el Reino había recibido la facultad para nombrar al diputado y que si la propia Junta había decidido que las ciudades turnarían en su elección, siempre debería designarse a alguien que contase con el consenso de todos o de la gran mayoría, véase Miguel Romaní Martínez (coord.): *Actas das Xuntas...*, vol. XVIII, p. 409. Al año siguiente, cuando se pretendía la continuidad de Gregorio Luaces, las ciudades que lo solicitaban indicaban que se les privaba de la libertad de elegir, al aprobar el Consejo el nombramiento de la persona a la que se oponían, *ibidem*, pp. 415-416. “...no puede aver cosa más irregular y agena de toda razón que el que aviendo de representar la tal persona a todo el Reyno y defender todos sus derechos y los particulares de cada ciudad, se las quiera estrechar a éstas a que precisamente ayan de sacrificar su libertad poniendo sus dependencias e intereses en manos de un diputado que no sólo carece de su aprobación sino que expresamente lo resiste...”, *ibidem*, p. 420.

³¹ Francisco Somoza de Monsoriu: *Estorvos i remedios...*, pp. 39-41.

³² “...Un Empleo de tan alto interés, i carácter debiera recaer en un Caballero entendido. En un hombre que conociese menudamente todos los arbitrios de las felicidades de su Patria. En un Sugeto celoso, i activo para promover las muchas pretensiones de el Reino, i con aptitud para demostrar su justicia a los Superiores legitimos... Le interesa poco a la Nacion, que su Diputado sea Miembro de éste, o de el otro Cuerpo, i aunque sea Regidor de sus Ciudades, si le faltan las prendas dignas para la mejora de su fortuna”, *ibidem*, pp. 40-41.

³³ Mercedes Galán Lorda: “Navarra en la Monarquía española...”, pp. 692-693.

tes de 1637 prohibiesen que estos diputados que iban a Madrid se ocupasen de negocios suyos, directa o indirectamente, lo que parece indicar que antes de esta fecha sí se daba esta circunstancia.³⁴

CONCLUSIONES

Después de todo lo señalado, el desarrollo de la institución del Diputado General durante el siglo XVIII nos muestra un panorama que no puede ser más desolador. Desde momentos en que algunas ciudades se plantean la propia existencia de la figura por su carestía, pasando por enfrentamientos entre las mismas a la hora de aceptar a alguno de los designados. Todo ello, sin olvidar que también hubo periodos en los que no se ejerció el oficio, bien porque no se logró nombrar a nadie, bien porque el designado no llegó a viajar sin que, previamente, se le anticipasen algunos gastos. Por si esto no fuese suficiente, debemos recordar que este diputado convivió con agentes particulares de algunas ciudades, que no abandonaron su puesto pese a la presencia del diputado general.

La visión desde la corte tuvo que ser de incredulidad ante el espectáculo y ello dificultaría la defensa de los intereses del reino, precisamente porque no se tomarían en serio ante la falta de postura común y general.

Podemos concluir, pues, que no existió en este período una voz del reino uniforme, sólida, compacta, capaz de plantear a la monarquía las justas reivindicaciones de Galicia sino intereses particulares de cada ciudad capital de provincia,³⁵ a veces comunes entre varias, pero sin llegar a confluir en esa ansiada postura única que facilitaría o, al menos, reduciría las trabas a la hora de obtener resultados positivos.

Muy probablemente, también juegue un papel relevante en todo este planteamiento una cierta visión del problema desde ópticas contemporáneas. Buscamos comprender el posicionamiento de un territorio de la monarquía española como si este contase con unas propias instituciones legitimadas por conformar la representación del pueblo, cuando sabemos que eso no era así. La inexistencia de principios democráticos, ni siquiera liberales, imposibilitan emplear los ojos actuales para comprender una sociedad, como la del Antiguo Régimen, donde aparecían intereses encontrados, alianzas puntuales más o menos duraderas que hacían complejo poder explicar los movimientos de nobles, burguesía urbana o clero, en un ambiente como el ga-

³⁴ *Idem*: “Navarra en la corte española: evolución de la figura de los ‘agentes’ en la Edad Moderna”, *Príncipe de Viana*, 76, 262 (2015), p. 593.

³⁵ Esta misma línea se puede ver en Manuel María de Artaza: “El reino de Galicia: Crisis y legados”, en J. Beramendi, X.R. Veiga (eds.): *Poder y territorio en la España del siglo XIX. De las Cortes de Cádiz a la Restauración*, Santiago de Compostela, 2014, pp. 33-66.

llego donde confluían ciudades, la mayoría de señorío, pero donde se conservaban algunas “islas” de realengo en un marcado contexto rural. Pretender que Galicia tuviese una voz propia resulta una mera quimera, más allá de intereses comunes con el fin de liberarse de fuertes imposiciones tributarias. Ciertamente, los acuerdos aprobados en cada Junta del Reino implicaban jurídicamente la existencia de ese sentir común, pero su efectiva plasmación necesitaba de unas gestiones y defensa en la corte que no se llegaban a producir. El muy mejorable método de selección del Diputado General, como hemos visto, unido a que cada ciudad planteaba su propia “guerra y estrategia” con oficiales propios en la Corte, no hacían más que complicar el problema.

Todo indica, al menos de la documentación que se ha expuesto en este trabajo, que la actividad que llevaron a cabo los diferentes Diputados Generales del Reino respondió más a intereses personales, de propia mejora de su posición, que de defensa de los del territorio que, formalmente, lo había designado. En contadas ocasiones esto será así, aunque tampoco serán muchos más los casos en los que el representante actúe para lograr beneficios particulares de la ciudad que le ha nombrado.

